



NUE 84-ADP-2019 (CM)

[REDACTED] contra Policía Nacional Civil (PNC)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las trece horas con treinta y tres minutos del veintitrés de junio de dos mil veinte.

I. Descripción del caso

I. El 3 de septiembre de 2019, [REDACTED] interpuso recurso de apelación por la supuesta falta de respuesta, por parte de **Ciro Antonio Barrera**, oficial de información de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, a su solicitud de supresión de datos personales, de fecha 3 julio 2019.

El apelante manifestó haber realizado ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **PNC** la solicitud de supresión de datos personales consistente en: "se proceda a la eliminación de su antecedente delincencial". Sin embargo, agregó que a la fecha de interposición de recurso no se le había brindado respuesta.

II. El instituto admitió el recurso de apelación y designó al comisionado **José Alirio Cornejo Najarro**, para instruir el procedimiento. Sin embargo, se reasignó a la comisionada **Cesia Yosabeth Mena Reina**, para continuar con el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

El 26 de septiembre de 2019, el oficial de información presentó el expediente administrativo relacionado con el presente caso, de conformidad con lo establecido en el art 82 Inc. 2° de la LAIP. En la nota de remisión expuso que la respuesta a la solicitud del apelante aún se encontraba en trámite.

Durante la etapa de instrucción de este procedimiento, mediante auto de las trece horas con quince minutos del 6 de septiembre de 2019, se requirió a la **PNC** por medio de su



titular que rindiera el informe justificativo al que se refiere el art. 88 de la LAIP. No obstante, pese a habersele notificado dicho auto en legal forma el 19 de septiembre de 2019, a la fecha no ha sido rendido; en ese sentido, conforme al principio de preclusión dispuesto en el art. 80 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), los plazos procesales son obligatorios y perentorios, en atención a otros principios como el de contradicción y lealtad procesal (art. 4 Código Procesal Civil y Mercantil); por lo que, se tendrá por no rendido.

Por otro lado, se requirió al apelante que el mismo plazo, señalará si ofrecería medios probatorios que no constarán en el expediente administrativo del trámite de la solicitud de datos personales o aportaría prueba diferente a la documental. El auto le fue notificado en legal forma el 19 de septiembre de 2019; por lo que, habiendo transcurrido el plazo establecido y no habiéndose manifestado por parte del apelante, la intención de incorporar otros medios probatorios, el caso constituye un asunto de mero derecho; es decir, que basta con la aplicación de normas y principios de la LAIP.

Lo anterior, en razón que la jurisprudencia contencioso administrativa¹, acompaña el criterio seguido por la Administración Pública, que cuando no se trata de controvertir hechos, sino de la aplicación del derecho al caso en particular, resulta aplicable lo establecido en el artículo 309 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), normativa supletoria aplicable de conformidad con el artículo 102 de la LAIP referido a que “...si hubiese conformidad sobre todos los hechos y el proceso queda reducido a una cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preparatoria y se abrirá el plazo para dictar sentencia”.

Por tanto, la Sala manifestó que la omisión de la audiencia establecida en el art. 91 de la LAIP, en asuntos de mero derecho, no produce la vulneración del debido proceso en sus manifestaciones de los derechos de audiencia, defensa, congruencia y ausencia de motivación, de dicho artículo, y el 102 de la LAIP.

2. Análisis del caso

¹ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 28 de enero de 2019, en el proceso de legalidad de referencia 408-2016.

Para resolver la controversia, el análisis versará sobre las siguientes consideraciones: (I) Breves acotaciones sobre los datos personales y el derecho a su protección; (II) Análisis sobre la supuesta falta de respuesta por del oficial de información de la PNC; y, (III) Análisis de la procedencia de la entrega de la información solicitada.

I. Por dato personal de acuerdo al concepto brindado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos (INAI), en su resolución de fecha 1 de febrero de 2017, de referencia RRA 3995/16, y que ahora hacemos nuestro, es aquella información relativa a un individuo identificado o identificable que entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Asimismo, señalan aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su domicilio, teléfono, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros.

Por otro lado, el art. 31 de la LAIP establece que: *“Toda persona, directamente o a través de su representante, tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitidas, permitiéndole conocer las razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante”* (escrito en negrita es nuestra).

Asimismo, la Sala de lo Constitucional en la Sentencia pronunciada en el proceso de Amparo el día 4 de marzo de 2012 de referencia 934-2007, reconoció que la protección de los datos es la técnica por el cual, se salvaguarda los objetivos de la faceta material del derecho a la autodeterminación informativa, integrada por un conjunto de derechos subjetivos, deberes, principios, procedimientos, instituciones y reglas objetivas.

Entre esos derechos o modos de ejercicio de esta faceta material, la jurisprudencia constitucional mencionó el siguiente:

a. La facultad de conocer la existencia de bancos de datos automatizados, es decir, que toda persona tiene derecho a conocer si los datos que le conciernen son objeto de uso o tratamiento por terceros.



b. La libertad de acceso a la información; facultad que implica la posibilidad de comprobar si se dispone de información sobre uno mismo y conocer el origen del que procede y la finalidad que se persigue.

En consonancia con lo anterior, el art. 36 de la LAIP reconoce este mismo derecho o modos de ejercicio, robusteciéndolo de contenido y estableciendo los mecanismos para garantizarlo.

Es importante señalar, que el tratamiento de datos personales es cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permita la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transparencia o por difusión, o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de datos personales. Éste en principio, depende del conocimiento y consentimiento del titular del dato personal; sin embargo, existen excepciones legales a esos presupuestos.

II. Una vez determinado lo anterior, es preciso analizar los elementos vertidos en el presente procedimiento, para determinar si se ha configurado la supuesta falta de respuesta por parte del oficial de información de la PNC a la solicitud realizada por el apelante el 3 de julio de 2019.

A. Al respecto, el art. 38 de la LAIP establece: “contra la negativa de entrega de informes, de la consulta directa, rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de datos personales, procederá la interposición del recurso de apelación ante el Instituto. **También procederá dicho recurso en el caso de falta de respuesta en los plazos a que se refiere el Art. 36 de esta ley**”.

Al respecto, el art. 36 de la LAIP dispone: “los titulares de los datos personales o sus representantes previa acreditación, podrán solicitar a los entes obligados, ya sea mediante escrito libre en los términos del art. 66 de la ley o en formulario expedido por el Instituto: d. la rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información que le concierna, según sea el caso, y toda vez que el procedimiento para tales modificaciones no esté regulado por una ley especial”.

En dicho supuesto, el oficial de información deberá de brindar respuesta al solicitante en un plazo de treinta días hábiles desde la presentación de la solicitud. En el caso en concreto, el apelante presentó su solicitud de supresión del dato personal al ente obligado el 3 de julio de 2019; por lo que, en los términos de la disposición antes citada debió haber brindado respuesta el 20 de agosto de ese mismo año.

En el expediente administrativo relacionado con este caso, consta que el oficial de información remitió la solicitud del apelante al Director General de la PNC; sin embargo, no se encuentra adjunta la respuesta del referido funcionario ni la emitida por el oficial de información. Por lo que, se tiene por verificada la falta de respuesta aducida por el apelante, tal omisión constituye una vulneración al derecho de acceso a la información personal.

Respecto a la solicitud de supresión de su antecedente policial realizada por el apelante, es oportuno señalar que deberá brindársele respuesta en los términos establecidos en la orden circular No. C-002-08-2019 emitida por el Director General de la PNC el 26 de agosto de 2019 y la cual entró en vigencia el 13 de septiembre de ese año, por medio de la cual se emitió la nueva Directiva para Normar la Emisión de las Solvencias o Constancia de Antecedentes Policiales.

3. Decisión del caso

De conformidad con lo antes expuesto y con base a lo establecido en los Arts. 2 de la Constitución de la República, 38, 96 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 135 de la Ley de Procedimientos Administrativos, este Instituto **resuelve:**

a) **Tener** por recibido el expediente administrativo relacionado con este caso.

b) **Ordenar** a la **Policía Nacional Civil (PNC)** que en el plazo de **tres días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la notificación de este auto, entregue al apelante respuesta a su solicitud de datos personales realizada el 3 de julio de 2019, en los términos establecidos en la orden circular No. C-002-08-2019 emitida por el Director General de la PNC el 26 de agosto de 2019 y la cual entró en vigencia el 13 de septiembre de ese año, por medio de la cual se emitió la nueva Directiva para Normar la Emisión de las Solvencias o Constancia de Antecedentes Policiales.

c) **Ordenar** a la PNC, que, en el plazo de **veinticuatro** horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento, que incluya la documentación entregada al apelante así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv.

d) **Hacer** saber que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede; sin embargo, puede acudir directamente a la Jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** a la Unidad de Cumplimiento para que verifique su ejecución.

f) **Publíquese** esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-


PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y EL COMISIONADO QUE LA SUSCRIBEN
CT/C

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diez días del mes de agosto de dos mil veinte.


NOTIFICADOR
IAIP

